

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, **29 SET. 2000**

Señor Presidente de la
Asamblea General
Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un Proyecto de Ley por el cual se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Los sistemas de seguridad social, en particular los regímenes de jubilaciones, deben ser revisados periódicamente con la finalidad de detectar qué tan adecuados son sus desempeños respecto a los objetivos que tienen planteados.

El régimen general de seguridad social fue reformado el 3 de setiembre de 1995 con la aprobación de la ley N° 16.713. A partir de ésta se creó un nuevo régimen para los colectivos amparados por el Banco de Previsión Social, con un pilar de solidaridad intergeneracional y otro de ahorro individual. Asimismo, las condiciones de acceso a las pasividades cambiaron sustancialmente.

El artículo 1° de dicha ley preveía que los regímenes aplicables a las personas

públicas no estatales de seguridad social deberían adecuarse a la nueva normativa, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos.

La Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, modificaron sus cartas orgánicas en 2001 y 2004 respectivamente, tendiendo a igualar las condiciones de acceso a las pasividades al régimen general reformado. Hasta ahora, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no realizó ajustes, más allá de cambios en aportes y creación de contribuciones especiales.

Atento a ésto y a las notorias dificultades que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el Poder Ejecutivo eleva el presente proyecto de ley con el objetivo de brindar solución al subsector involucrado, así como mantener coherencia con el resto del sistema previsional.

1.- Antecedentes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias integra el sistema de instituciones de seguridad social. En su carácter de organismo paraestatal, tiene el cometido de brindar cobertura a los trabajadores de la actividad financiera en el país.

Desde su creación, en el año 1925, ha cumplido con los fines previstos en el marco legal que la rige a partir del financiamiento establecido, con los aportes de las empresas y de los trabajadores, y con el producido de sus inversiones.

En los últimos veinte años la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ha impulsado distintas iniciativas para reformar su marco legal, lo que fue consagrado parcialmente con la sanción de la ley N° 16.565 del 21 de agosto de 1994. Debido al carácter parcial de lo recogido por esta norma, la misma resultó insuficiente para salvaguardar la estabilidad y viabilidad del Instituto en el mediano y largo plazo, razón por la que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias remitió en el año 2001 al Poder

Ejecutivo un proyecto de ley que contenía las modificaciones que, a su juicio, era necesario introducir al marco legal vigente. Desde entonces se reconocía un escenario de crecientes dificultades y amenazas a las bases de sustento del sistema previsional, lo que se vio reflejado en un permanente deterioro de la relación activo – pasivo. Este fenómeno se acentuó en los últimos años, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Año	Relación Activo/Pasivo
1965	4,5
1970	2,3
1975	1,8
1985	1,8
1990	1,3
1995	1,1
2000	1,0
2005	0,8

Fuente: IESTA – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Entre las múltiples causas que esta situación reconoce, debemos ubicar, como principales, las reestructuras del sistema financiero estatal y privado, la introducción de tecnología sustitutiva de puestos de trabajo, la prohibición del ingreso de funcionarios a los bancos estatales que rigió hasta el año 2005, el desarrollo de procesos de tercerización de actividades financieras por parte de algunas empresas, así como los cambios demográficos y de composición del mercado de trabajo que han impactado en el conjunto de los institutos de seguridad social.

A esta realidad debemos agregar el impacto producido por la crisis del año 2002, que implicó un fuerte redimensionamiento del sistema financiero, la pérdida de miles de puestos de trabajo y, por tanto, de cotizantes activos al Instituto.

Desde hace una década, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias viene cubriendo su déficit operativo con sus reservas y con el aporte extraordinario que tanto las empresas como los jubilados y pensionistas, han realizado. Las primeras, con un 4,5% adicional al aporte patronal sobre la nómina, a partir de la ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, y los segundos, por lo establecido en la ley N° 17.841 de 15 de octubre de 2004.

El resultado operativo del Fondo Jubilatorio en el año 2007 arrojó un déficit de \$1.047 millones, según el siguiente detalle:

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DE CAJA BANCARIA EN 2007		
	PESOS URUGUAYOS	
<u>DÉFICIT OPERATIVO SIN APORTES LEYES Nos. 17.613 y 17.841</u>	<u>1.764.930.535</u>	
<u>FINANCIAMIENTO:</u>		<u>PONDERACIÓN</u>
<u>4,5% APOORTE PATRONAL ART. 60 LEY No. 17.613 de 27/12/2002</u>	334.788.902	18,97%
<u>IMPUESTO A LAS PASIVIDADES LEY N° 17.841 de 15/10/2004</u>	383.227.161	21,71%
PRODUCIDO DE INVERSIONES E INVERSIONES	1.046.914.472	59,32%
	1.764.930.535	100%

Actualmente se está frente al agotamiento de las reservas financieras realizables. De acuerdo a estudios técnicos y a las proyecciones actuariales realizadas, el agotamiento definitivo de las reservas de la Caja se produciría en los primeros meses del año 2009, con la lógica consecuencia de la imposibilidad de enfrentar las obligaciones legales con sus afiliados, desde allí en más.

Es preciso resaltar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no ha presentado problemas de gestión, mostrando absoluta transparencia en la misma. Por su parte, en los último tiempos, el Consejo Honorario ha tomado medidas que implicaron

restricciones en los egresos, tanto en el permanente abatimiento de los costos operativos, como en aspectos previsionales en la medida que las facultades otorgadas por el marco legal vigente lo permitían.

2.- Características de la reforma

El presente proyecto de modificación del marco legal que rige a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias parte de reconocer los orígenes de su actual crisis, para corregirlos y prevenir su repetición en el futuro, dotando al Instituto de viabilidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. En tal sentido, adecua la normativa previsional a la realidad actual, convergiendo hacia los parámetros del conjunto del sistema de seguridad social del país.

El nuevo régimen previsional que emerge de las modificaciones propuestas, tiene las siguientes características principales:

- ✓ se adecua razonablemente a lo establecido por la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995, atendiendo especialmente a las formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades amparadas por la Caja;
- ✓ avanza en el reconocimiento del campo afiliatorio real que corresponde al Instituto, estableciendo, por ejemplo, la incorporación de todas aquellas empresas y trabajadores cuya actividad, en forma habitual y profesional, sea intervenir en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas u ordenes de compra, así como también otorgar préstamos en dinero;
- ✓ inicia un proceso de modificación en las bases de contribución, procurando no depender exclusivamente del número de afiliados activos y de la masa salarial asegurada, posibilitando en el futuro la adecuación paulatina de las tasas de aportación patronales y personales al régimen general vigente;
- ✓ adecua el régimen previsional, tanto en las condiciones de acceso, como en la forma de cálculo de las prestaciones, igualando la edad de retiro para hombres y mujeres, extendiendo el período a considerar para el cálculo del sueldo básico

- jubilatorio y estableciendo menores tasas de reemplazo para los beneficios;
- ✓ para las pensiones, establece soluciones que guardan similitud con el régimen general;
 - ✓ reconoce un adecuado equilibrio en el esfuerzo que deberán realizar el Estado, las empresas y los afiliados activos y pasivos, para superar la coyuntura económica por la que se atraviesa;
 - ✓ la contribución del Estado, así como la contribución adicional de las empresas y los afiliados pasivos tendrá un carácter transitorio, pautado por la recuperación de un adecuado nivel de reservas del Instituto.

II.- CONTENIDOS DEL PROYECTO

Todas las medidas planteadas se articulan en forma integral, conformando en su conjunto un escenario de viabilidad para los próximos cuarenta años, de acuerdo a las proyecciones analizadas para su elaboración.

1.- Campo afiliatorio considerado

Se define como instituciones, entidades y empresas obligatoriamente comprendidas en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, a todas las empresas de intermediación financiera autorizadas por el decreto – ley N° 15.322 y sus modificativas y concordantes, las compañías de seguro, la Bolsa de Comercio, las empresas administradoras de crédito, las que en forma habitual y profesional otorguen préstamos en dinero, las cooperativas de ahorro y crédito, las que presten servicio de transporte de valores, las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera, y las empresas que sean de propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas anteriormente.

De acuerdo a los estudios realizados, se incorporarían a la Caja Bancaria 4.600 nuevos afiliados, lo que llevaría la relación activo / pasivo del actual 0,78 a superar la unidad a lo largo de todo el período considerado en las proyecciones.

2.- Modificación del modelo de financiamiento

Se reformula el sistema de aportación patronal al financiamiento del Instituto, a partir de desvincular parcialmente la contribución de la nómina de trabajadores para incorporar una contribución asociada al nivel de actividad financiera.

Es así que las empresas comprendidas en el régimen de la Caja, contribuirán con un aporte patronal básico, cuya alícuota será del 25,25% para las empresas financieras y de seguros que a la fecha contribuyen a la Caja Bancaria, y de un 7,50% para las que se incorporan a partir de la presente ley, la Bolsa de Comercio, las entidades gremiales y la propia Caja. A ello se suma una prestación complementaria que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente.

El texto prevee la reducción de la alícuota del aporte patronal básico en hasta un 4,50%, una vez alcanzado un nivel adecuado de reservas por parte del Instituto. El Poder Ejecutivo queda facultado a acelerar el cronograma en la medida que la situación de la Caja lo permita.

3.- Régimen previsional futuro

Se adecuan los parámetros del régimen previsional convergiendo, con atención a las particularidades y especificidades del colectivo amparado, a las condiciones del régimen general que rige la seguridad social en el país.

Es así que se equipara la edad para configurar causal jubilatoria para hombres y mujeres, se aumentan los años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y se rebajan las tasas de reemplazo.

Se igualan los derechos pensionarios entre los hombres y mujeres, adecuando las condiciones de acceso a las vigentes para el régimen general.

Se establecen períodos de transición tanto, para la aplicación de las nuevas condiciones jubilatorias por edad avanzada, como para la adecuación de la edad de la mujer a los efectos jubilatorios.

Todas las modificaciones se ubican en línea con el objetivo de unificar las condiciones de acceso a los derechos jubilatorios en el conjunto de los institutos de seguridad social del país.

4.- Contribuciones adicionales de carácter transitorio

La muy grave situación económico – financiera de la Caja Bancaria, así como el hecho de que sus reservas estén prácticamente agotadas, obligan a que se deba atender el déficit financiero inmediato. Es por ello que se establecen contribuciones adicionales, de carácter transitorio, de parte del Estado, las empresas y los jubilados y pensionistas bancarios.

La asistencia del Estado se materializa a través de una contribución de igual monto que el aporte adicional que realizarán los jubilados y pensionistas cuyas pasividades correspondan al régimen que se deroga, en relación con el que hoy efectúan.

Adicionalmente, constituye aporte del Estado para enfrentar la situación existente, la recaudación que deja de percibir el Banco de Previsión Social por las empresas que pasan a incorporarse a la Caja Bancaria.

En cuanto a las empresas, el aporte adicional se ubica en un 4,5% del aporte patronal básico. Las empresas de intermediación financiera y las aseguradoras podrán abatir dicho aporte adicional, a través de la adquisición de títulos de deuda emitidos por la Caja, los que serán amortizados a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que las reservas financieras de la Caja iguallen el presupuesto de pasividades y gastos de funcionamiento de un ejercicio.



**Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social**

El aporte de los jubilados y pensionistas del Instituto se conformará a partir de la eliminación de la partida denominada "prima por edad" para aquellos cuya pasividad supere las 12 Bases de Prestaciones y Contribuciones y un incremento del aporte que hoy realizan los jubilados y pensionistas con pasividades superiores a 10 BPC.

Todas estas contribuciones comenzarán a disminuir gradualmente a partir de que la Caja alcance un nivel de reservas financieras equivalente a un 50% del presupuesto de un ejercicio de pasividades y gastos de funcionamiento.

Saludamos a ese Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. Tabare Vazquez
Presidente de la República



**Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social**

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DEFINICIÓN Y COMETIDO

Capítulo Único

Artículo 1º. (Naturaleza Jurídica).- La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias es persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 2º. (Cometido).- La Caja tiene el cometido de brindar coberturas en las contingencias de Seguridad Social que ocurran a los integrantes del colectivo que incluye, conforme a la ley.

TÍTULO II

ÁMBITO SUBJETIVO

Capítulo Único

Artículo 3º. (Instituciones, entidades y empresas comprendidas).- Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

A) los bancos públicos y privados;

B) todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto - ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes);

C) el Banco de Seguros del Estado;

D) las compañías de seguros;

E) la Bolsa de Comercio;

F) las empresas administradoras de crédito que, en forma habitual y profesional, intervengan en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares, con recursos propios o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público;

G) las empresas que, en forma habitual y profesional, otorguen préstamos en dinero a sujetos residentes en el País, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin; no quedan incluidos en lo dispuesto por este literal, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y los institutos de seguridad social;

H) las cooperativas de ahorro y crédito no comprendidas en los literales anteriores;

I) las empresas que presten servicios de transporte de valores;

J) las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad de intermediación financiera con personalidad jurídica;

K) las empresas que sean propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales anteriores, que desarrollen actividades que integren la unidad técnico-económica de las mismas; se incluyen en lo previsto por este literal, los fondos de inversión y los fideicomisos.

Artículo 4º. (Inclusión).- El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias alcanza a:

A) todos los trabajadores de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación, quedando excluidos aquellos que la Caja ocupe en la explotación de sus inversiones, cuya afiliación se registrará por las leyes que amparen las actividades respectivas;

B) los directores, administradores, socios y síndicos, con carácter rentado, de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en el régimen de la Caja, excepto

aquellos que, al amparo de lo previsto por el literal B del artículo 2º de la ley Nº 16.565 de 21 de agosto de 1994, hubieren optado por una afiliación diferente, en los plazos y condiciones establecidos en dicha disposición, antes de la entrada en vigencia de la presente ley;

C) los jubilados de la propia Caja.

La Caja llevará el registro de historia laboral de sus afiliados, asentando, como mínimo, servicios prestados, asignaciones computadas y aportes.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN

Capítulo I

Dirección, administración y responsabilidades

Artículo 5º. (Órgano directriz).- La Caja será dirigida y administrada por un Consejo Honorario compuesto de siete miembros e integrado de la siguiente manera:

- un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que lo presidirá;
- tres miembros, que representarán a las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3º, uno de los cuales será elegido por las instituciones oficiales, y los otros dos, por las restantes;
- dos miembros, que representarán a los afiliados indicados en los literales A) y B) del inciso primero del artículo 4º, electo por dichos afiliados;
- un miembro, que representará a los afiliados indicados en el literal C) del inciso primero del artículo 4º, electo por dichos afiliados.

Con cada Consejero titular será elegido doble número de suplentes en orden respectivo.

Agotada la lista de suplentes de representantes de las instituciones, entidades y empresas, del personal en actividad o de los jubilados, el Consejo convocará de inmediato a elecciones complementarias para el orden en que ello hubiere ocurrido.

Es condición indispensable para desempeñar cualquiera de los cargos, ser ciudadano mayor de edad y, en el caso de los cargos electivos, pertenecer al personal afiliado en actividad o en pasividad.

Artículo 6º. (Elección de los representantes de las empresas, entidades e instituciones privadas).- El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que, para la integración del mismo, corresponden a las empresas, entidades e instituciones privadas, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado.

Con sesenta días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada una de dichas empresas, entidades o instituciones.

Artículo 7º. (Facilitación para el ejercicio del cargo de Consejero).- Las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como integrantes del Consejo Honorario de la Caja, el cumplimiento de las tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos.

Artículo 8º. (Representación).- La representación legal de la Caja será ejercida por el Presidente y el Consejero Secretario o quienes los subroguen reglamentariamente, sin perjuicio de los mandatos que éstos otorguen.

Excepcionalmente, en casos de impedimentos, excusación, licencia, enfermedad o ausencia del Presidente - cuando éste no tuviere suplente en condiciones de asumir el cargo - o del Consejero Secretario, dicha representación, con las mismas facultades, estará a cargo del o de los miembros del Consejo Honorario que éste designe.

Artículo 9°. (Quóruns y mayorías).- El Consejo Honorario podrá sesionar con un quórum de cuatro miembros y adoptar resoluciones válidas con idéntica mayoría de votos conformes, salvo los casos en que expresamente se establezcan quóruns o mayorías especiales.

En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 10. (Renovación de los miembros del Consejo).- Los miembros del Consejo Honorario permanecerán tres años en su cargo. Los que representen a las instituciones, entidades y empresas adscritas y los que representen a los afiliados, se renovarán por terceras partes, cesando en cada año un Consejero por cada representación. Tanto éstos, como el representante del Poder Ejecutivo, podrán ser reelegidos.

Los miembros electos no podrán ingresar al Consejo estando éste integrado con algún representante o trabajador de la misma institución, entidad o empresa a que aquéllos pertenezcan. Esta incompatibilidad comprende también, en su caso, al representante del Poder Ejecutivo.

No obstante la prohibición a que refiere el inciso anterior, podrán formar parte del Consejo Honorario, simultáneamente, hasta dos funcionarios o empleados de una misma institución, entidad o empresa adscrita, siempre y cuando uno de ellos represente a las de éste genero y el otro, al personal.

Los Consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se hayan incorporado los que deben reemplazarlos.

Artículo 11. (Competencias y atribuciones del Consejo Honorario).- Compete al Consejo Honorario:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar la Caja.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular de la Caja y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal de la Caja, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar los deberes formales a cargo de los afiliados y de las empresas, instituciones y entidades comprendidas en el régimen de la Caja, así como las fechas y mecanismos de versión de las cotizaciones.

G) Sancionar a los afiliados y a las empresas, instituciones y entidades referidas en el literal anterior, que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los montos mínimos de las prestaciones no establecidos legalmente, así como los máximos iniciales de las pasividades que se otorguen con arreglo al régimen que se sustituye, en la forma y condiciones previstas por el artículo 7° de la ley N° 16.565 de 21 de agosto de 1994 y el inciso final del presente artículo.

I) Extender la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Conceder los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, no pudiendo superarse el índice de revaluación allí previsto.

K) Celebrar convenios en materia de Seguridad Social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por el literal H) requerirán cinco votos conformes y las relacionadas con los literales I), L) y LL), seis votos conformes. Asimismo, en los casos de los literales H) e I), dentro de los votos conformes para completar las respectivas mayorías deberá hallarse el del representante del Poder Ejecutivo. Las atribuciones referidas por los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 12. (Responsabilidad). - La Caja será civilmente responsable del daño causado a terceros en el cumplimiento de sus cometidos.

La Caja podrá pedir resarcimiento y/o repetir lo que hubiere pagado en reparación, contra los integrantes del Consejo Honorario, o sus empleados, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, y obrando con culpa grave o dolo, causaren daño.

En los casos de resoluciones del Consejo Honorario, que fueren violatorias de la Constitución, leyes o reglamentos, quedarán exentos de la responsabilidad a que refiere el inciso anterior:

A) los consejeros que hubieran hecho constar en el acta de la sesión del Consejo Honorario de que se trate, el voto negativo y su fundamento;

B) los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

Los consejeros que hayan votado negativamente podrán solicitar se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y los antecedentes respectivos, siempre que formulen dicha solicitud en la misma sesión en la que formularon su voto negativo o dentro del término perentorio de ocho días hábiles siguientes, quedando en suspenso la decisión impugnada, a la espera de lo que dictamine en definitiva el citado Poder.

Si el Poder Ejecutivo, no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes al de la recepción de la copia del acta y los antecedentes, la resolución del Consejo Honorario quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los recursos que pudieran entablar los interesados contra la misma.

Artículo 13. (Inembargabilidad y exenciones).- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

No obstante, el Consejo Honorario podrá disponer, por mayoría simple, la constitución de fideicomisos financieros o de garantía, con activos de la Caja, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones.

La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Capítulo II

Notificaciones, peticiones y medios impugnativos

Artículo 14. (Notificaciones).- Las resoluciones del Consejo Honorario serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Las citaciones y notificaciones a un colectivo de personas, se tendrán por realizadas mediante la publicación respectiva en el Diario Oficial durante tres días seguidos, resultando plenamente válida para cada uno de los miembros de aquél.

Artículo 15. (Peticiones).- La Caja está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo, dentro del término de ciento cincuenta días contados a partir del día siguiente al de presentación de la misma. La petición se entenderá desechada si no se resuelve dentro del término indicado, configurándose resolución denegatoria ficta.

En ningún caso el vencimiento de este plazo exime a la Caja de su obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto.

Las decisiones, expresas o fictas, podrán ser impugnadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 16. (De las impugnaciones de los actos del Consejo Honorario).- Las resoluciones del Consejo Honorario podrán ser impugnadas por razones de mérito o de legitimidad mediante el recurso de revocación interpuesto ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación.

El recurso sólo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Interpuesto el recurso, el Consejo Honorario dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que ésta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 17. (Revocación de Oficio).- La revocación de oficio de una resolución del Consejo Honorario, sea total o parcial, fundada en error de hecho o de derecho u otra causal de nulidad, no dará lugar a la devolución de haberes percibidos por el interesado, salvo que éste hubiera actuado de mala fe.

TÍTULO IV

PATRIMONIO E INVERSIONES

Capítulo Único

Artículo 18. (Patrimonio).- El patrimonio de la Caja se integra con:

- A) los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro;
- B) el producido de las prestaciones legales de carácter pecuniario y de los tributos, que las leyes impongan en beneficio de la Caja, a los afiliados activos y pasivos y a las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen;
- C) las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas;
- D) el producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan;
- E) los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 19. (Gastos de administración).- Los gastos de administración del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 20. (Estados, balances y memoria anual).- El Consejo Honorario remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación de la Caja, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 21. (Estudio actuarial).- El Consejo Honorario hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 22. (Inversiones).- La Caja, luego de realizar sus servicios y las reservas que la prudencia aconseje, podrá realizar las siguientes inversiones:

1) Los saldos disponibles a la entrada en vigencia de esta ley, así como el producido de las inversiones preexistentes a ella, podrá colocarlos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos, pudiendo arrendarlos, enajenarlos o celebrar contratos de leasing a su respecto.

C) Préstamos a afiliados, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes de los integrantes del Consejo Honorario.

2) Con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, generados a partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá realizar las siguientes inversiones:

A) Las previstas en el artículo 123 de la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico régimen se dará al producido de estas inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

B) Las referidas en el literal C) del numeral 1) del inciso primero del presente artículo, hasta el 20 % (veinte por ciento) de las inversiones indicadas en el numeral 2) del mismo. Idéntico régimen tendrá el producido de las inversiones a que refiere el presente literal.

El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones,

pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso

Artículo 23. (Aportación personal de activos).- La tasa de aportación personal de los afiliados activos, para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, será de los porcentajes que se establecen a continuación, aplicados sobre todas las asignaciones computables:

A) el 17,5 % (diecisiete y medio por ciento), para los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C), D), E) y J) del artículo 3º de la presente ley, y los trabajadores de la propia Caja;

B) el 15 % (quince por ciento), para los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3º de la presente ley.

En el caso de los afiliados correspondientes a las empresas comprendidas en el literal K) del artículo 3º, se aplicará la tasa que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente la propiedad de las mismas.

Artículo 24. (Agentes de retención).- Las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3º y la propia Caja, serán agentes de retención del aporte de los afiliados indicados en los literales A) y B) del inciso primero del artículo 4º, que les presten servicios.

Artículo 25. (Financiamiento patronal).- Las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3º y la propia Caja, contribuirán al financiamiento de esta última mediante:

A) los aportes patronales; y

B) la adquisición de títulos de deuda emitidos por la Caja, en las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 26. (Aportes patronales).- Los aportes patronales para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, cuyo sujeto activo es la Caja, estarán constituidos por los siguientes conceptos:

A) un aporte patronal básico, consistente en un porcentaje aplicado sobre todas las asignaciones computables de los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4º;

B) una prestación complementaria, que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente. En el caso del Banco Central del Uruguay, en el de las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, en el de las Instituciones Financieras Externas (artículo 4º del decreto-ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982) y en el de la propia Caja, el monto de esta prestación complementaria se determinará como un porcentaje de las asignaciones computables referidas en el literal A) del presente artículo.

Artículo 27. (Aporte patronal básico).- La tasa del aporte patronal básico, a que refiere el literal A) del artículo anterior, será:

A) el 25,25 % (veinticinco coma veinticinco por ciento), para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C), y D) del artículo 3º y para la propia Caja;

B) el 7,5 % (siete y medio por ciento), para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales E), F), G), H), I) y J) del referido artículo, sin perjuicio de las exoneraciones que correspondieren conforme al artículo 69 de la Constitución de la República.

En el caso de las empresas comprendidas en el literal K) del artículo 3º, se aplicará la tasa que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente su propiedad.

La alícuota prevista en el literal A) del inciso primero del presente artículo, se reducirá a razón de 0,45 (cero coma cuarenta y cinco) puntos porcentuales por año, a partir del 1º de enero del año civil siguiente a aquel en que las reservas financieras de la Caja alcancen el 50 % (cincuenta por ciento) del presupuesto estimativo de prestaciones y gastos de funcionamiento para el ejercicio siguiente, que el Consejo Honorario deberá aprobar antes del 30 de noviembre de cada año. La referida reducción alcanzará hasta un máximo de 4,5 (cuatro y medio) puntos porcentuales.

El proceso de reducción antedicho quedará en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido en el inciso anterior.

Artículo 28. (Prestación complementaria).- La prestación complementaria a que refiere el literal B) del artículo 26 se devengará y liquidará mensualmente, y será:

A) Para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A) y B) del artículo 3º, excluidos el Banco Central del Uruguay, las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y las Instituciones Financieras Externas: el 4 ‰ (cuatro por diez mil) de la suma de los siguientes conceptos:

1) el saldo al fin de cada mes, de los activos propios radicados en el País, excluidos los depósitos obligatorios en concepto de encaje en el Banco Central del Uruguay;

2) la diferencia de los saldos al fin de cada mes, de los activos propios radicados en el exterior y de los pasivos correspondientes a obligaciones por intermediación financiera con el sector no financiero no residente, siempre que tales activos superen a los pasivos referidos.

B) Para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales C) y D) del artículo 3º: el 12 ‰ (doce por diez mil) de las primas emitidas en el mes, netas de anulación;

C) Para las indicadas en los literales F), G) y H) del artículo 3º: el 4 ‰ (cuatro por diez mil) del saldo al fin de cada mes, de los activos propios radicados en el País.

D) Para el Banco Central del Uruguay, las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y las Instituciones Financieras Externas: el 10 % (diez por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores, directores, administradores, socios y sindicatos, comprendidos en el artículo 4º.

E) Para las indicadas en el literal I) del artículo 3º: el 20 ‰ (veinte por diez mil) de sus ingresos mensuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

F) Para las indicadas en el literal K) del artículo 3º, el que surja de aplicar el régimen de aportación que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente su propiedad.

G) Para la propia Caja: el 5,5 % (cinco y medio por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores comprendidos en el artículo 4º.

A los efectos de la determinación de las bases imponibles establecidas en los literales A), B) y C) del inciso primero del presente artículo, se aplicarán las normas de valuación del Banco Central del Uruguay y, en ausencia de éstas, las relativas al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE)

Las alícuotas a que refiere el presente artículo constituyen tasas máximas, quedando el Poder Ejecutivo facultado a disminuirlas.

Artículo 29. (Emisión de títulos de deuda).- La Caja emitirá títulos de deuda cuyos adquirentes podrán ser, exclusivamente, las instituciones, entidades y empresas comprendidas en los literales A), B), C) y D) del artículo 3º.

Los referidos títulos serán nominativos y su titularidad no podrá transmitirse a terceros.

Su amortización se iniciará a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto a que refiere el inciso tercero del artículo 27, quedando en suspenso durante los ejercicios en que no se cumpla dicha condición.

La reglamentación establecerá las condiciones de emisión y amortización, dentro de los límites legales antedichos.

Artículo 30. (Abatimiento del aporte patronal básico).- Quienes adquieran los títulos referidos en el artículo anterior tendrán derecho, por tal virtud, a un abatimiento del aporte patronal básico, equivalente a la menor de las siguientes cifras:

A) el 4,5 % (cuatro y medio por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4º;

B) el monto efectivamente invertido en los referidos títulos de deuda, en el período de devengamiento del correspondiente aporte patronal básico.

El límite establecido en el literal A) del inciso primero del presente artículo, se reducirá en los mismos puntos porcentuales y oportunidades en que se reduzca el aporte patronal básico, conforme a lo previsto por los incisos tercero y final del artículo 27.

Artículo 31. (Contribución a cargo de jubilados y pensionistas).- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso 1º del artículo 1º del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá las tasas que se establecen en el artículo siguiente y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone por los siguientes conceptos:

A) jubilaciones, tanto vigentes como futuras, acordadas conforme al régimen que se deroga por la presente, y las jubilaciones anticipadas transitorias;

B) pensiones cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

Artículo 32. (Tasas de la contribución a cargo de jubilados y pensionistas).- Las tasas de la contribución establecida en el artículo anterior serán las que correspondan al monto nominal de la cédula jubilatoria o pensionaria de cada contribuyente, medido en Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC, ley N° 17.856 de 20 de diciembre de 2004), de acuerdo a la siguiente escala:

BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES			
Escala	MÁS DE	HASTA	Tasa
1	0	6	0,0%
2	6	10	2,0%
3	10	15	7,5%
4	15	20	10,0%
5	20	25	11,0%
6	25	30	12,0%
7	30	35	13,0%
8	35	40	14,0%
9	40	45	15,0%
10	45	50	16,0%
11	50	55	17,0%
12	55	60	18,0%
13	60		20,0%

En los casos de pasividades cuyo monto nominal supere las 10 BPC (diez Bases de Prestaciones y Contribuciones), las respectivas tasas establecidas precedentemente se incrementarán en 2 (dos) puntos porcentuales a partir del 1° de enero de 2010.

Las tasas previstas para las pasividades indicadas en el inciso anterior, incrementadas conforme a lo dispuesto en el mismo, se reducirán a razón de 0,4 (cero coma cuatro) puntos porcentuales por año, a partir del 1° de enero del año civil siguiente a aquél en que las reservas financieras de la Caja lleguen a representar el 50 % (cincuenta por ciento) del presupuesto a que refiere el inciso tercero del artículo 27. La referida reducción alcanzará hasta un máximo de 4 (cuatro) puntos porcentuales.

El proceso de reducción antedicho quedará en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido en el inciso anterior.

En ningún caso el monto de las prestaciones líquidas que surja de la aplicación de las tasas previstas en este artículo, podrá ser inferior al que corresponda a la máxima prestación líquida de la escala inmediata inferior.

Artículo 33. (Reducción de contribuciones).- Facúltase al Poder Ejecutivo, previa consulta a la Caja, a acelerar el proceso de reducción de alícuotas previsto en el inciso tercero del artículo 27 y en el inciso tercero del artículo anterior, en caso de que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto referido en la primera de las disposiciones nombradas.

Artículo 34. (Asistencia de cargo del Estado).- El Estado, con cargo a Rentas Generales, verterá a la Caja:

A) por el ejercicio 2009, una suma equivalente al doble de la diferencia entre lo recaudado por la contribución establecida en el artículo 32 por dicho año, y lo que se habría obtenido de haberse aplicado, a la misma base de cálculo de esa contribución, las



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

alícuotas del impuesto creado por la ley N° 17.841 de 15 de octubre de 2004, que se deroga por el artículo 93 de la presente;

B) a partir del 1° de enero de 2010, cada año, una suma igual a la que resulte de sumar:

1) la diferencia obtenida a través del cálculo previsto en el precedente literal A), considerando el respectivo ejercicio, y

2) la proveniente del incremento adicional de dos puntos porcentuales de las tasas establecidas en el artículo 32, previsto para que opere desde esa fecha en el citado artículo.

Para la determinación de dichas sumas, se tendrán en cuenta las variaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 32 y en el artículo 33.

Facúltase a la Caja a descontar, mes a mes, las cantidades derivadas de la aplicación del presente artículo, de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga de las pasividades a su cargo.

TÍTULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

Capítulo I

De las prestaciones

Artículo 35. (Prestaciones). Las prestaciones a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias son las siguientes:

A) por invalidez, vejez y sobrevivencia: las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones y el subsidio por expensas funerarias;

B) por desocupación forzosa: el subsidio por desempleo.

Capítulo II

De las jubilaciones

Artículo 36. (Causales).- Según la causal que la determine, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 81, la jubilación únicamente puede ser:

- a) común;
- b) por incapacidad total;
- c) por edad avanzada.

Artículo 37. (Jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se requiere reunir los siguientes requisitos:

- 1) Un mínimo de 30 (treinta) años de servicios;
- 2) El cumplimiento de las siguientes edades mínimas:
 - A) para el hombre, 60 (sesenta) años;
 - B) para la mujer:
 - 1) 56 (cincuenta y seis) años a partir del 1º de enero de 2010;
 - 2) 57 (cincuenta y siete) años a partir del 1º de enero de 2011;
 - 3) 58 (cincuenta y ocho) años a partir del 1º de enero de 2013;
 - 4) 59 (cincuenta y nueve) años a partir del 1º de enero de 2015;

A partir del 1º de enero de 2017, la edad mínima de jubilación de la mujer por esta causal, será de 60 (sesenta) años.

Artículo 38. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos.

Para los trabajadores, directores, administradores, socios y sindicatos, que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos como mínimo y siempre que el afiliado haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese y no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes.

El Consejo Honorario establecerá el procedimiento para determinar la configuración de la incapacidad y la oportunidad de su ocurrencia. El grado de severidad de la incapacidad que dé mérito a la concesión de esta jubilación, se establecerá atendiendo a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

El afiliado deberá someterse a exámenes médicos periódicos en caso de que la Caja lo estime pertinente. La ausencia injustificada a los mismos aparejará la inmediata suspensión del servicio de la pasividad, sin perjuicio de su reanudación desde el momento en que se acredite el mantenimiento de la incapacidad que dio origen a aquélla.

La prestación dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 39. (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configura siempre que no se cuente con causal de jubilación común, con la reunión de los siguientes requisitos:

A) un mínimo de servicios de:

- 1) 11 (once) años, a partir del 1º de enero de 2010;
- 2) 12 (doce) años, a partir del 1º de enero de 2011;
- 3) 13 (trece) años, a partir del 1º de enero de 2013;
- 4) 14 (catorce) años, a partir del 1º de enero de 2015;
- 5) 15 (quince) años, a partir del 1º de enero de 2017.

B) el cumplimiento de las siguientes edades mínimas:

- 1) para el hombre, 70 (setenta) años;
- 2) para la mujer:
 - 66 (sesenta y seis) años, a partir de 1º de enero de 2010;
 - 67 (sesenta y siete) años, a partir del 1º de enero de 2011;
 - 68 (sesenta y ocho) años, a partir del 1º de enero de 2013;
 - 69 (sesenta y nueve) años, a partir del 1º de enero de 2015;
 - 70 (setenta) años, a partir del 1º de enero de 2017.

Asimismo, se configura al reunir:

- a) 69 (sesenta y nueve) años de edad y 17 (diecisiete) años de servicios, o
- b) 68 (sesenta y ocho) años de edad y 19 (diecinueve) años de servicios, o
- c) 67 (sesenta y siete) años de edad y 21 (veintiún) años de servicios, o
- d) 66 (sesenta y seis) años de edad y 23 (veintitrés) años de servicios, o
- e) 65 (sesenta y cinco) años de edad y 25 (veinticinco) años de servicios.

Las modalidades de configuración de la causal previstas en los precedentes literales c), d) y e) entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2010.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio definido en la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes.

Artículo 40. (Cumplimiento de edad en inactividad).- Para configurar causal jubilatoria, en los casos en que se alude a un mínimo de edad, no se requiere que el mismo se cumpla en actividad.

Capítulo III

Del subsidio transitorio por incapacidad parcial

Artículo 41. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevinida en actividad o en periodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

- A) No menos de dos años de servicios reconocidos.

Para los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

- B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.
- C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

El Consejo Honorario establecerá el procedimiento para determinar la configuración de la incapacidad y la oportunidad de su ocurrencia. El grado de severidad de la incapacidad que dé mérito a la concesión de este subsidio, se establecerá atendiendo a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o, si correspondiere, desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal A) del artículo 327 de la ley N° 16.320 de 1° de noviembre de 1992.

Artículo 42. (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial). Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios de la Caja o por los que ésta indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia